

EL ESTADO Y EL PROBLEMA DE LA LEGITIMACIÓN DEMOCRÁTICA EN VENEZUELA BAJO EL SISTEMA “PUNTO FIJO”

GEORGE PHILIP

EN FEBRERO DE 1992, HUGO CHÁVEZ ENCABEZÓ SIN ÉXITO un intento de golpe de Estado en Venezuela y como resultado del mismo fue encarcelado. Luego de que el presidente Caldera le otorgara el indulto, a principios de 1994, Chávez organizó un movimiento político, con tal fortuna, que lo llevó a obtener en 1998 el triunfo en las elecciones presidenciales, con 56% de los votos. En 1999 y 2000, el incremento en el número de votos a su favor confirmó su popularidad, a pesar de que su gobierno seguía estando muy dividido, hecho evidenciado por el intento golpista en su contra, en abril de 2002, el cual estuvo muy cerca de tener éxito.

El ascenso de Chávez al poder puede analizarse desde diferentes perspectivas. En el presente trabajo consideramos que un aspecto fundamental en dicho ascenso fue la incapacidad, tanto de la élite política como del pueblo venezolanos, para establecer una distinción clara y precisa entre lo que constituían formas legales y formas ilegales de comportamiento político. Esta conclusión parece algo desconcertante. Aunque el sistema “Punto Fijo”^{*} adolecía de una serie de deficiencias, no dejaba de ser una democracia. En efecto, las elecciones se efectuaban de manera rutinaria y siempre eran muy reñidas. Sin embargo, en febrero de 1992, a menos de dos años de que se realizaran los comicios para elegir al nuevo presidente, se produjo un golpe de Estado para derrocar al gobierno electo, acción que contó con un considerable apoyo civil, mientras que la credibilidad democrática de la mayoría de la élite opositora al golpe de Chávez resultó sumamente dañada por las violaciones a la ley que ésta cometiera.

En diciembre de 1993, Rafael Caldera fue electo presidente y, al negarse a calificar el intento golpista de 1992 como un acto fundamental-

^{*} “Punto Fijo” es el nombre de la residencia de Caracas donde, el 31 de octubre de 1958, se celebró el pacto con el que líderes de partidos políticos se propusieron darle cauce institucional a la vida política de Venezuela.

mente criminal, se indultó a los dirigentes del mismo e incluso se otorgó a uno de ellos un cargo de muy alto nivel dentro del gobierno. Esto permitió que Chávez y sus aliados obtuvieran una respetabilidad democrática que de otra forma hubiera sido casi imposible. En diciembre de 1998 el propio Chávez resultó electo presidente, por lo que es evidente que la mayoría de los votantes venezolanos no consideró que el hecho de que, poco más de seis años antes, encabezara un fallido intento de golpe de Estado lo descalificaba para ocupar la silla presidencial.

Es claro, entonces, que la opinión pública venezolana, así como gran parte de la clase política y los propios líderes del golpe, no diferenciaban mayormente entre lo que era un comportamiento político legal y uno ilegal. De los cinco aspectos que, según Linz y Stepan, son necesarios para la consolidación democrática, dos mostraban serias deficiencias:¹ el Estado de derecho era débil y la burocracia era patrimonial, más que imparcial. Resulta paradójico que no se diera la consolidación democrática en Venezuela siendo éste un país con más de 30 años de democracia electoral. De esta forma, es claro que la longevidad de una democracia no tiene necesariamente una relación universal con su grado de consolidación. De igual forma, es evidente que la fortaleza de los sistemas partidistas y otros aspectos electorales son insuficientes para la consolidación democrática cuando existen debilidades institucionales muy serias en el nivel del Estado.

La literatura existente sobre el caso de Venezuela corrobora este argumento general sobre la consolidación. Es obvio que, antes del intento de golpe de 1992, el control democrático sobre el ejército ya mostraba profundas deficiencias.² Asimismo, la sorprendente popularidad que tuvo esta acción se debió, al parecer, a que la mentalidad de muchos venezolanos era tal que podía apoyar *tanto* la democracia *como* al ejército. Este modo de pensar valoraba más la popularidad que la legitimidad institucional como tal. En palabras de Myers y O'Connor: "no todos los 'demócratas' están en contra de todos los golpes militares".³ Esto no sólo nos permite explicar por qué el intento golpista de febrero de 1992 tuvo tanto éxito, sino también el motivo por el cual la ilegalidad tolerada puede representar una grave amenaza para la democracia, a saber, porque fácilmente puede hacer que se desvanezca la diferencia entre las formas democráticas y antidemocráticas de comportamiento político.

¹ J. Linz y A. Stepan, *Problems of Democratic Transition and Consolidation*, Baltimore, John Hopkins, 1996.

² D. Norden, "Democracy and Military Control in Venezuela: From Subordination to Insurrection", *Latin American Research Review*, vol. 33, núm. 2, 1988.

³ D. J. Myers y R. O'Connor, "Support for Coups in a Democratic Political Culture: A Venezuelan Exploration", *Comparative Politics*, vol. 30, núm. 2, enero de 1998, pp. 193-212.

El propósito del presente trabajo es brindar bases empíricas más firmes a estas observaciones en abstracto sobre la consolidación democrática. Para tal efecto examinaremos varios incidentes interrelacionados en los cuales el sistema Punto Fijo mostró debilidades graves en el nivel del Estado. En sus inicios, el sistema fue incapaz de detectar a los conspiradores de febrero de 1992. Tras el primer intento de golpe de Estado, el gobierno de Pérez no pudo aplicar a los conspiradores el castigo que les correspondía debido a la idea que prevalecía entre el pueblo de que tal acción sería una hipocresía, dada la complicidad que tanto el gobierno como el sistema de partido dominante tuvieron en diversos tipos de prácticas corruptas. En este clima, los intentos por restaurar cierta credibilidad para el sistema Punto Fijo también fallaron y, en cambio, dieron lugar a que se acusara al propio Pérez de diversos delitos cometidos durante su gestión. La posterior política de "borrón y cuenta nueva" del presidente Caldera, si bien quizá evitó el derrocamiento armado del gobierno, también tuvo inconvenientes, pues en cierta medida legitimó los dos golpes de Estado de 1992 y no consiguió aplacar la agitación que prevalecía dentro del ejército. Por tanto, fue incapaz de establecer las bases para un gobierno que fuera popular o exitoso. Lo que revelan todos estos hechos no es tanto una serie de errores políticos como de debilidades institucionales fundamentales.

La primera parte del presente trabajo se basa principalmente en investigaciones sobre las relaciones civicomilitares en Venezuela durante la época del golpe de febrero de 1992 y después de ella. Si bien es cierto que existe abundante literatura relativa al papel que desempeñó el ejército durante ese periodo,⁴ sigue siendo necesario reexaminar aquello a lo que se enfrentaba el sistema Punto Fijo, considerando algunos factores contingentes de corto plazo, como serían, por ejemplo, el deficiente desempeño económico de Venezuela durante la década de los ochenta y la escasa popularidad del gobierno de Pérez, aunque estos aspectos quizá no fueron tan decisivos como se pensó alguna vez. De hecho, en la actualidad existen evidencias palpables de que, mucho antes de que se agravaran los problemas económicos, el sistema Punto Fijo ya tenía enemigos reales y peligrosos, a quienes los políticos electos de Venezuela solían subestimar. Mucho antes del golpe de Estado ya se estaban fraguando múltiples conspiracio-

⁴ A. Zago, *La rebelión de los ángeles. Reportaje, los documentos del movimiento*, Caracas, Warp, 1988; Agustín Blanco Muño (ed.), *Habla el comandante: testimonios violentos*, Caracas, Pablo Neruda, 1988; A. Garrido, *La historia secreta de la revolución bolivariana*, Caracas, 2000; R. Gott, *In the Shadow of the Liberator: Hugo Chavez and the Transformation of Venezuela*, Londres, Verso, 2000; H. Trinkunas, "The Crisis in Venezuelan Civil-Military Relations: From *Punto Fijo* to the Fifth Republic", *Latin American Research Review*, vol. 37, núm. 1, 2002.

nes; incluso en la época en que la mayoría del pueblo venezolano apoyaba claramente las instituciones del Punto Fijo,⁵ existía ya un grupo opositor entre la élite que no las aceptaba. El primer intento golpista puede explicarse en gran medida como resultado de una conspiración de largo plazo y, sólo de manera parcial, como producto de contingencias de corto plazo. A su vez, el segundo golpe se comprende principalmente como consecuencia del éxito casi logrado por la primera tentativa.

En segundo lugar, en lo que se refiere a las secuelas del golpe de Estado de febrero, los políticos del sistema Punto Fijo estaban en gran medida maniatados por su complicidad, a lo largo de varios gobiernos anteriores, en una serie de actos escandalosamente corruptos y, peor aún, por los que no recibieron castigo.⁶ Ésta fue otra área en la que las deficiencias en la aplicación de la ley debilitaron el sistema político en su totalidad. Incluso se ha señalado que la opinión pública venezolana sólo repudiaba la corrupción cuando percibía una conexión entre ésta y la caída económica general.⁷ Si bien es posible que sea cierta la observación de que el tema de la corrupción no era muy importante durante el periodo de prosperidad de Venezuela, la idea que el interés por la corrupción coincide plenamente con el empobrecimiento subestima el evidente daño económico que provocaron algunos casos inauditos de corrupción. Tanto el escándalo Recadi (relacionado con divisas) de mediados de la década de los ochenta como la ruina del Banco Latino y de gran parte del sistema bancario, en 1994, fueron sin duda perjudiciales para todo el aparato económico. En otras palabras, la corrupción ciertamente dejó al pueblo venezolano en peor situación de la que estaba y la incapacidad del sistema para castigar a todos los responsables tuvo un efecto deslegitimador.

El tercer aspecto empírico por considerar es la intranquilidad dentro del ejército, en 1992, la cual resultó muy difícil de revertir. El gobierno de Caldera anhelaba provocar el retorno a una especie de normalidad constitucional. De hecho, en julio de 1994 tuvo la oportunidad de utilizar el ejército para disolver el Congreso, pero optó por no hacerlo. Ahora bien, cuando no se ataja con decisión la inestabilidad dentro del ejército, la legitimidad de cualquier sistema constitucional está en riesgo.⁸ Incluso en los

⁵ A. Templeton, "The Evolution of Popular Opinion", en Louis Goodman *et al.* (eds.), *Lessons of the Venezuelan Experience*, Washington, Woodrow Wilson Center, 1995, pp. 79-114.

⁶ W. Little y A. Herrera, "Political Corruption in Venezuela", en W. Little y E. Posada-Carbo, *Political Corruption in Europe and Latin America*, Londres, ILAS, 1996, pp. 267-287.

⁷ A. Romero, "Rearranging the Deckchairs on the Titanic", *Latin American Research Review*, vol. 32, 1997.

⁸ D. Norden, *Military Rebellion in Argentina: Between Coups and Consolidations*, Nebraska,

casos en que la imposición franca y abierta del régimen militar no es la política en práctica, la amenaza de inestabilidad en el interior del ejército puede coartar las políticas oficiales y trastocar el proceso democrático. Caldera intentó mantenerse sutilmente alejado del peligro político, pero al final sus esfuerzos por evitar una salida no confrontativa al conflicto entre chavistas y antichavistas no fueron exitosos. Con esto no quiero decir que Caldera tuviera una mejor opción que necesariamente hubiera funcionado; sólo pretendo destacar el hecho de que la legitimación del intento golpista de febrero de 1992 debilitó aún más la posición institucional del sistema Punto Fijo.

Antes de sustentar de manera empírica el argumento según el cual las debilidades en el nivel del Estado constituyeron problemas decisivos, debemos examinar brevemente algunas hipótesis alternativas. No podemos, por motivos de espacio, exponer en detalle el debate académico al respecto,⁹ pero es evidente que si bien el sistema Punto Fijo adolecía de ciertas debilidades, también tenía fortalezas. Las instituciones democráticas de Venezuela estaban ciertamente exentas de algunas de las fallas más comunes a las que se ha atribuido el derrumbe de las democracias latinoamericanas (cuando y donde esto ha ocurrido). Los líderes de los partidos dominantes eran políticamente moderados, solían negociar y cooperar unos con otros, y existía poco exclusivismo político. El resultado de todo ello era un gran consenso dentro de la élite política. Asimismo, se evitó el tipo de polarización que condujo a la crisis y tragedia de España en 1936 y de Chile en 1973. En efecto, de acuerdo con la mayoría de los criterios aceptados por los politólogos de los noventa como indicadores de estabilidad económica, Venezuela tenía notas muy altas. Así pues, con base en esta combinación de circunstancias, durante la ola democrática de los ochenta, algunos observadores llegaron a considerar que Venezuela debía ser un ejemplo a seguir para el resto de los países de la región. Por tal motivo, resulta indispensable reflexionar acerca de por qué no ocurrió esto.

Aunque el presente análisis se basa principalmente en los problemas legales y administrativos, no se excluye la posibilidad de que también la lógica interna de representación del sistema Punto Fijo tuviera deficiencias. Por ejemplo, Crisp sostiene que había problemas en las formas de representación de los grupos de interés del país, las cuales eran, en su opi-

University of Nebraska, 1996; J.S. Fitch, *The Armed Forces and Democracy in Latin America*, Baltimore, John Hopkins, 1998.

⁹ M. Cameron y F. Major, "Venezuela's Hugo Chavez: Savior or Threat to Democracy?", *Latin American Research Review*, vol. 36, núm. 3, 2001.

nión, demasiado rígidas y elitistas.¹⁰ Sin duda, existe una diferencia entre los argumentos que parten de la premisa de que había algo fundamentalmente erróneo en las normas mismas y aquellos cuya tesis de base es que lo que requiere explicarse son las orientaciones populares y elitistas que se dieron a dichas normas. Es evidente que todo conjunto de normas contiene aspectos problemáticos, pero el propósito de un sistema de normas es, precisamente, sentar las bases para resolver los conflictos. No obstante, lo que ocurrió bajo el sistema Punto Fijo, e incluso antes de 1958, fue que los sistemas patrimoniales de administración tendieron a reemplazar todo aquello que estuviera basado en una ley o procedimiento formal. Sin embargo, no se debe culpar de esto a las deficiencias de las normas formales en sí mismas.

Otra hipótesis que conviene considerar es la existencia de debilidades estructurales en toda economía dependiente del petróleo.¹¹ Los ingresos de Venezuela derivados del petróleo, luego de haber sido muy elevados en la década de los setenta, disminuyeron mucho a mediados de los ochenta y han permanecido muy por debajo de su nivel inicial. Esto ha provocado decepciones y frustraciones en una población que está perfectamente consciente tanto de su nueva situación de pobreza como del hecho de que aquella riqueza generada por el petróleo no se utilizó de manera eficiente. Incluso, es posible que los ingresos petroleros hayan creado en el venezolano medio la idea equivocada de que “debería” ser más rico de lo que es.

Hay algo de cierto en ese argumento. Es posible que la dependencia de las exportaciones petroleras dificulte establecer instituciones y que la gente se habitúe a esperar demasiado, de manera que las fluctuaciones económicas produzcan una peligrosa decepción. Sin embargo, las explicaciones que se basan en los aspectos culturales de la política también requieren de un fundamento institucional. La expectativa de que el poderoso flujo de dinero proveniente del petróleo continuaría quizá haya hecho que los creadores políticos del sistema Punto Fijo no se preocuparan por prever la forma en que éste sobreviviría en tiempos difíciles. Aun así, sigue siendo necesario comprender mejor por qué dichas instituciones fallaron en la práctica.

¹⁰ B. Crisp, *Democratic Institutional Design: The Powers and Incentives of Venezuelan Politicians and Interest Groups*, Stanford, UP, 2000.

¹¹ T. Karl, *The Paradox of Plenty: Oil Booms and Petro-States*, Cambridge, UP, 1997.

EL INTENTO GOLPISTA DE FEBRERO DE 1992 Y LAS RELACIONES CIVICOMILITARES

Una élite pequeña pero activa, con mucha influencia y contraria al sistema, que nunca estuvo de acuerdo con el Punto Fijo ni con las instituciones de una democracia basada en partidos fue la que originalmente planeó el golpe de Estado de febrero de 1992.¹² Este resentimiento provenía, en parte, del contexto de Guerra Fría en el que se había establecido el pacto del Punto Fijo y la exclusión consecuente de la izquierda a fin de hacer que éste resultara aceptable a la comunidad empresarial y el gobierno estadounidenses. Por tal motivo, con cierta justificación pero también con exageración, los detractores del sistema Punto Fijo lo consideraban políticamente sesgado. El papel que desempeñaron los excluidos de las instituciones del Punto Fijo en el movimiento chavista puede deducirse del hecho de que el primer gabinete de Chávez incluyera a Luis Miquilena como ministro del Interior, a Domingo Rangel como ministro de Relaciones Exteriores, a Ali Rodríguez como ministro de Energía y a Jorge Giordani como ministro de Planeación. Estas cuatro personas habían sido destacados oponentes civiles de izquierda al sistema Punto Fijo, y Rodríguez incluso luchó como guerrillero durante la década de los sesenta.

Existen muchas evidencias de que Chávez fue un enemigo político del sistema Punto Fijo desde sus primeros días como oficial militar. De acuerdo con Nelson Sánchez,¹³ desde los inicios del sistema hubo un movimiento militar clandestino en su contra. Un grupo de oficiales, que participó en el derrocamiento de la dictadura de Pérez Jiménez, en 1958, y que después quedó políticamente marginado por el sistema, formó en 1977 el llamado Frente de Oficiales Militares de Carrera. Su intención era convertirse en uno de los pilares de un sistema tripartita, junto con la Iglesia radical y “el pueblo”, así como restablecer el populismo de 1958. Más tarde, este grupo y algunos antiguos insurgentes de izquierda de la década de los sesenta entraron en contacto.

El ex guerrillero Douglas Bravo comentó a Garrido que los vínculos entre los antiguos comunistas y los oficiales militares simpatizantes databan de finales de los sesenta. Para ese entonces algunos miembros de la izquierda marxista se habían percatado de que su insurgencia había fracasado, lo cual se debía, en su opinión, a que la izquierda se había vuelto demasiado sectaria. Por tanto, empezaron a buscar aliados como parte de un movimiento de la izquierda nacionalista. Por cierto, cabe señalar que algo pare-

¹² Myers y O'Connor, *op. cit.*

¹³ Citado en Garrido, *op. cit.*

cido sucedía en Perú a finales de la década de los sesenta, cuando algunos insurgentes formaron una alianza con oficiales militares también de izquierda bajo el mando del general Velasco. Al parecer, el movimiento de los oficiales militares de carrera se puso en contacto con Hugo Chávez a través de su hermano, quien era un activista de izquierda entre los círculos universitarios. Se entiende que desde 1982 hubo conversaciones entre Nelson Sánchez (de los oficiales militares de carrera), Douglas Bravo y Chávez. Poco después, Chávez organizó y dirigió a un pequeño grupo propio dentro del ejército. El propósito de los miembros de estos distintos grupos no era un levantamiento inmediato, pues el sistema político aún contaba con mucho apoyo, sino vigilar el curso de los acontecimientos y esperar la oportunidad para enfrentarse al sistema de partido. Si bien existen algunas diferencias entre los relatos de los diversos participantes, todos los periodistas "internos" confirman que, ya desde 1983, Chávez y un grupo de sus seguidores estaban involucrados en actividades militares políticas contra el sistema Punto Fijo.

Por tanto, queda claro que ciertos factores más inmediatos, tales como los problemas económicos de Venezuela de finales de los ochenta, la falta de popularidad del gobierno de Pérez y la politización de la política de ascensos, no fueron la causa directa de la antipatía de los líderes del golpe de Estado dirigido por Chávez. Éstos ya estaban alineados y se aprovecharon de dichas dificultades para conseguir aliados de corto plazo para un objetivo de largo plazo, a saber, el derrocamiento del sistema Punto Fijo. Por supuesto, el número de los involucrados en la conspiración contra el sistema fue al principio relativamente pequeño, pero su habilidad para operar dentro del ejército les confirió un peso del todo desproporcionado en relación con su número.

Es cierto que las tendencias económicas favorecieron a los conspiradores y que los disturbios en Caracas de febrero de 1989 constituyeron una vergüenza para el sistema. Por consiguiente, el intento de golpe de Estado fue una combinación de conspiración de largo plazo y oportunidad de corto plazo. Sin embargo, hubo un tercer factor, a saber, la incapacidad del gobierno para prever el golpe. ¿Cómo puede explicarse esto? Inmediatamente después de los acontecimientos, la explicación oficial fue que el golpe había sido la labor de unos cuantos fanáticos, por lo cual la incapacidad para preverlo era lamentable, pero comprensible. Amén de que, entonces, no todos quedaron convencidos con tal explicación, ahora sabemos que fue casi totalmente falsa. Una persona que fungía como ministro del gabinete durante el periodo en que tuvo lugar el intento golpista, y a la cual pudimos entrevistar, indicó con mucha más precisión que el control civil sobre el ejército era débil debido a la penetración en las unidades de inte-

ligencia militar de los partidos políticos y a la implicación de aquéllas en escándalos de corrupción.¹⁴

De hecho, a lo largo del periodo del Punto Fijo, el ejército estuvo implicado en escándalos de corrupción de manera casi constante.¹⁵ Durante años, la élite política civil fingió ceguera ante la corrupción del ejército, pues pensaba que ello ayudaría a mantener a los generales lejos de la política. Sin embargo, como es obvio, esa estrategia constituyó un grave error de cálculo. Si se hubiera aplicado cabalmente la ley dentro del ejército, es dable suponer que la inteligencia militar habría sido más eficaz en descubrir la conspiración. La incapacidad del gobierno para prever o comprender el intento golpista también fue muy comentada por los observadores simpatizantes de Chávez,¹⁶ quienes lo interpretaron como un síntoma más de la debilidad y vulnerabilidad del Estado.

El intento de golpe de Estado fue planeado durante mucho tiempo y en él participaron muchas personas. Sus dirigentes provenían de los mandos medios del ejército, aunque también hubo un importante apoyo por parte de la fuerza aérea. En la época en que tuvo lugar el golpe de Estado, Chávez era teniente coronel, y los otros líderes eran de rangos similares o inferiores. Asimismo, el asalto tuvo bastante apoyo por parte de oficiales no comisionados, lo cual es inusual en la América del Sur posterior a 1945. Tras el fracaso del golpe, no menos de 273 sargentos fueron dados de baja del ejército de manera deshonrosa. Por tanto, el sustancial número de militares involucrados basta para refutar a quienes sostienen que el golpe de Estado fue labor de un pequeño número de extremistas.

Chávez, en efecto, sostenía que el movimiento había contado con un gran apoyo civil, aunque eran obvias las fricciones entre los líderes civiles y los líderes militares.¹⁷ De la misma forma, la izquierda opositora al sistema tuvo conversaciones con algunos de los oficiales no comisionados que estaban listos para secundar el golpe de Estado, como lo confirma Douglas Bravo.¹⁸ Un conflicto de liderazgo hizo que Chávez pospusiera el atentado del 16 de diciembre de 1991 al 4 de febrero de 1992.¹⁹ Por otra parte, muchos creen que algunos de los miembros del partido Causa R (Causa Radi-

¹⁴ Entrevistas a Miguel Rodríguez, Caracas, 2 de abril de 1992, y a Gerver Torres, 27 de marzo de 1992.

¹⁵ E. Arrovo, "Elections and Negotiations: Democracy in Venezuela", tesis de doctorado, Universidad de Londres, 1983.

¹⁶ A. Muller Rojas, *Relaciones peligrosas: militares, política y Estado*, Caracas, UCV, 1992.

¹⁷ J. Buxton, *The Failure of Political Reform in Venezuela*, Ashgate, Basingstoke, 2001.

¹⁸ Es posible que la versión que presenta Bravo en *La historia secreta de Garrido* reste importancia a los aspectos puramente militares del golpe.

¹⁹ Zago, *op. cit.*

cal, organización de izquierda, surgida del sindicalismo) se habrían unido al gobierno después del golpe, si éste hubiera tenido éxito, pero que se mantuvieron totalmente al margen cuando fue evidente que había fracasado.²⁰ Más adelante, la mayoría de los miembros del partido Causa R se reagruparon en el Patria Para Todos (PPT), que apoyó a Chávez cuando lanzó su candidatura para la presidencia. Dados los enormes alcances de dichos planes, resulta bastante sorprendente que las autoridades venezolanas no se hubieran dado cuenta de que algo extraño ocurría.

En América del Sur a menudo se presentan conflictos entre las aspiraciones profesionales de los altos mandos militares y las formas clientelistas de control que en ocasiones prefieren los políticos civiles electos. En el ejército venezolano, mientras que el reclutamiento y promoción de los oficiales con base en el criterio militar de la meritocracia se aplicaba hasta el nivel de teniente coronel, el ascenso a los grados de coronel o general debía ser aprobado por el Congreso, es decir, por los líderes de los dos partidos principales. Siendo esto así, la idea generalizada entre los oficiales de menor rango era que los procedimientos para lograr un ascenso estaban sumamente politizados, lo cual consideraban contrario a la integridad y autonomía del ejército.²¹ Fue por ello, en cierta medida, por lo que muchos oficiales de rango medio apoyaron alguna forma de conspiración militar.

En Venezuela, a partir de 1970, se exigió a los oficiales de rango medio que tomaran cursos de posgrado en la universidad con el propósito de mejorar los niveles educativos del ejército. Así, en la época en que el golpe de 1992 se estaba organizando, varios de sus líderes estudiaban ciencias políticas en la Universidad Simón Bolívar. Uno de los académicos que impartían clases a los oficiales militares en dicha universidad comentó al autor que, en 1992, la inmensa mayoría de los militares que asistían a su clase apoyaban a Chávez y su intento golpista, y expresaban, en cambio, un desprecio casi unánime por los generales, de quienes consideraban que se habían vendido a los políticos para obtener beneficios personales.²² Los militares de mandos medios creían que muchos de sus superiores habían sido nombrados por motivos políticos y contaban con muy escasa preparación.²³ Los

²⁰ Buxton, *op. cit.*

²¹ Para un análisis más amplio de las relaciones civicomilitares, véase Norden, art. cit., *Latin American Research Review*, vol. 33, núm. 2. Asimismo, véase C. Arceneaux, "Democratic Consolidation or Deconsolidation? Military Doctrine and the 1992 Military Unrest in Venezuela", *Journal of Political and Military Sociology*, vol. 24, núm. 1, 1996, pp. 57-82.

²² Entrevista a Luis Castro Leyva, 20 de abril de 1997.

²³ Tanto Gott (*op. cit.*) como Norden (*op. cit.*) consignan que el almirante Gruber, líder del intento golpista de noviembre de 1992, confirmó esto.

oficiales superiores, por su parte, habían perdido el contacto con sus subordinados, pues interpretaban sus ascensos (a menudo, con razón) como un premio a sus logros políticos, más que burocráticos.

El mismo Chávez declaró que ningún coronel o general había participado en el intento de golpe de Estado de febrero.²⁴ Esto, en sí mismo, no resulta sorprendente, pero lo que sí llama la atención es que ningún coronel o general haya sabido lo suficiente sobre lo que se fraguaba para darlo a conocer a las autoridades. Por tanto, la posibilidad de una conspiración del silencio no es factible. Enterados, los altos mandos habrían tenido razones de mucho peso para oponerse a un golpe de Estado, pues de tener éxito un atentado dirigido por un teniente coronel se habría desquiciado por completo la jerarquía militar. En tal eventualidad, todos los oficiales superiores habrían sufrido una gran humillación, al hacerse evidente su incapacidad para controlar a sus subordinados, y lo más probable es que se les hubiera obligado a renunciar en grupo.

Por consiguiente, es razonable pensar que la incompetencia del gobierno de partidos para controlar al ejército se debió a una combinación de errores de organización e institucionales. Los análisis académicos de los problemas de organización en el interior del ejército son sin duda valiosos y útiles, pero también es importante que las relaciones civicomilitares no se vean como un tema independiente, una especie de aspecto separado, más bien técnico, de la política democrática. Por el contrario, el problema se produjo por el carácter de las instituciones gobernantes de Venezuela, en su conjunto. De hecho, en muchas otras áreas del sector público venezolano se evidencia un problema similar. Muchos autores suelen sugerir que, durante la década de los noventa, la ineptitud —por no decir algo peor— fue la característica común de prácticamente todo el Estado venezolano. Por ejemplo, ciertas investigaciones sobre el comportamiento del Consejo Federal Electoral, a principios de los noventa, concluyeron que éste estaba controlado por los partidos dominantes y que había corrupción, manipulación de las leyes, incompetencia e, incluso, en ocasiones, adulteración descarada de los resultados electorales.²⁵ La incapacidad del Estado para actuar de manera profesional en muchas áreas de la política social también fue evidente,²⁶ lo mismo que con respecto al sistema judicial, como comentaremos con más detalle en la siguiente sección.

²⁴ Blanco Muñoz, *op. cit.*, pp. 164 y 165.

²⁵ Buxton, *op. cit.*

²⁶ A. Angell y C. Graham, "Can Social Sector Reform Make Adjustment More Stable and Equitable? Lessons from Chile and Venezuela", *Journal of Latin American Studies*, vol. 27, núm. 1, 1995, pp. 189-217.

El fracaso de la élite política para controlar y administrar instituciones estatales fundamentales, como lo es el ejército, fue el reflejo de problemas muy arraigados en la institucionalización estatal. Los nombramientos para los puestos burocráticos se hacían con base en la lealtad personal o la filiación partidista. Los partidos políticos tenían un dominio excesivo del Estado y las élites partidistas también controlaban el proceso legal. Como resultado de esto, había un problema rampante de falta de aplicación de la ley y de excesiva informalización del gobierno. De hecho, la incapacidad del Estado para controlar al ejército era del todo característica de las relaciones que prevalecían en ese tiempo entre los políticos y el Estado venezolanos. El control civil sobre el ejército se perdió ahí donde las instituciones políticas del país eran más vulnerables, a saber, en el punto de contacto entre las prácticas clientelistas de los políticos de partido y las aspiraciones de los militares de rango medio de progresar en la jerarquía militar meritocrática.

POLÍTICAS CIVILES Y DESCONTENTO MILITAR EN EL PERIODO 1992-1993

El ex presidente y candidato presidencial independiente, Rafael Caldera, pronunció un discurso inmediatamente después del golpe de Estado de febrero en el que declaró públicamente su apoyo a algunos de los propósitos (si bien no a los métodos) de los líderes golpistas, a quienes prometió otorgarles el indulto en caso de que resultara electo presidente. A raíz de ese discurso, la posición de Caldera en las encuestas previas a las elecciones de diciembre de 1993 mejoró de manera notable: alcanzó el primer lugar en las preferencias, posición que mantuvo hasta que tuvieron lugar los comicios.

En noviembre de 1992 se suscitó un nuevo intento de golpe y un “casi fracaso” a finales de 1993. Las continuas tensiones dentro del ejército fueron un detonante fundamental del atentado de noviembre, dirigido por el almirante Gruber, con apoyo de la fuerza aérea. De acuerdo con la versión del propio Gruber,²⁷ en marzo de 1992 se reunió con el ministro de Defensa y se quejó enérgicamente de que los procedimientos de ascenso en el ejército se habían politizado en extremo. Al verse ignorado, empezó a planear su golpe de Estado en agosto, mismo que llevó a cabo en noviembre. El fracaso de dicho golpe se debió en parte a dificultades de operación, y también a que el apoyo civil fue menor que el que esperaba.

²⁷ Citado en Gott, *op. cit.*, p. 75.

El propio Chávez ha dicho que la falta de apoyo a Gruber tuvo que ver con el respaldo popular otorgado a Caldera.²⁸ Es cierto que este último era un hombre al que muchos de los seguidores de Chávez respetaban por haber abandonado el Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI), partido que dirigiera durante mucho tiempo, y por haber roto con el sistema bipartidista. Pero también había otro factor. A principios de 1993, tanto los servicios de inteligencia de los Estados Unidos como los venezolanos empezaban a penetrar las filas de los futuros golpistas y, por tanto, cada vez se hacía más difícil organizar una intervención militar que prometiera tener éxito. Por ejemplo, a finales de 1993, el presidente Ramón José Velásquez comentó a un diplomático británico que tenía información sobre un grupo de oficiales pagados por el Banco Latino que conspiraba contra él, información que pronto trascendió al gobierno de los Estados Unidos, el cual expresó su clara oposición a cualquier intento de golpe de Estado.²⁹

Ya antes señalamos que una de las causas de que los dirigentes civiles no pudieron someter con eficacia al ejército fue su incapacidad para castigar a los políticos involucrados en escandalosos actos de corrupción. La naturaleza del problema puede apreciarse en la respuesta de los políticos civiles al golpe de Estado de febrero de 1992. Se ha dicho que ese acto cambió el paisaje político en forma radical. Sin embargo, ello no significa que la autonomía de los políticos en el gobierno se esfumara de inmediato. Por el contrario, quizá tuvieron una última oportunidad para restaurar la credibilidad del sistema. En la primavera de 1992, muchos venezolanos vieron a Chávez más como un "denunciante" que como un posible dictador, lo cual en cierta forma dio al gobierno la posibilidad de un nuevo inicio, pero también lo colocó ante un dilema: ¿cómo debía responder al golpe de Estado? ¿Debía perdonar a todos o castigar a todos? Si las autoridades insistían en castigar únicamente a los líderes del golpe y a nadie más, corrían el riesgo de generar resentimientos que darían lugar a la inestabilidad. Mantener a Chávez en prisión haría ver al gobierno como hipócrita, pues su decisión de sancionar a los rebeldes del pueblo contrastaría con el hecho bien sabido de que los tribunales continuamente dejaban libres a los políticos corruptos. Además, los seguidores civiles de Chávez podrían y estarían dispuestos a tomar las calles en protesta por su encarcelamiento. Por otra parte, si el gobierno intentaba hacer una purga del sistema políti-

²⁸ Blanco Muño, *op. cit.*, pp. 164 y 165.

²⁹ Esta información se basa en entrevistas confidenciales que se realizaron a diplomáticos británicos.

co en su conjunto, no podría evitar que cayeran algunas cabezas prominentes.

En un principio, pareció que las élites partidistas realizarían una reforma. Poco después del intento de golpe, el presidente Pérez trató de negociar un entendimiento con Eduardo Fernández, el dirigente del COPEI. La idea inmediata de ambos fue que los dos partidos dominantes debían reunirse y negociar un programa de reformas que pudiera devolver al sistema cierta credibilidad. Éste era el primer paso más lógico. Ninguno de los dos partidos mayores estaba a favor de un golpe de Estado, y Fernández mantenía relaciones estrechas con las élites empresariales, que tampoco apoyaban la idea. Sin embargo, muchos líderes empresariales no estaban tanto a favor de la democracia como en contra de Chávez y contra sus seguidores de izquierda, a los cuales consideraban peligrosos.³⁰ Lamentablemente, los empresarios más importantes de Venezuela habían dejado de apoyar incondicionalmente el sistema de partidos de su país.

Para los observadores externos pareció, a primera vista, como si se hubiera llegado a un acuerdo. Tanto los dirigentes políticos como las élites empresariales estaban de acuerdo en entregar su "oveja negra" si las otras partes hacían lo mismo. Pérez, entonces, llamó a su gabinete al líder independiente de Acción Democrática (AD), Pinerua Ordaz, con el mandato de poner fin a la corrupción y al abuso de poder. Entonces, la retórica contra las figuras políticas que se presumían corruptas fue en aumento. A fin de reintegrar la credibilidad moral al sistema, se hizo creer a los lectores de la prensa venezolana que se llevaría a cabo una serie de arrestos espectaculares. A finales de marzo de 1992, Fernández ordenó públicamente a Pinerua que iniciara su tarea de limpieza.³¹

No obstante, había algunos escépticos. Luis Matos Azocar, un disidente del AD, del cual, en marzo de 1992, estaba en vías de ser expulsado, convocó a una conferencia de prensa para anunciar su salida del partido. Afirmó que el AD del Congreso, que para entonces ya estaba totalmente distanciado de Pérez, presionaría para que el presidente renunciara a su cargo si Pinerua se atrevía a llevar ante la justicia a algún partidario del ex presidente Lusinchí.³² El problema era que ni siquiera el propio Pérez estaba exento de las sospechas de corrupción, por lo que sus detractores alegaban que por qué se le protegía a él mientras que se sacrificaba a Lusinchí. Ahora bien, si se brindaba protección tanto a este último como a Pérez, entonces ninguna otra facción partidista aceptaría que se arrestara a sus miembros. Al final, lo

³⁰ Entrevista a Anibal Romero, 3 de abril de 1992.

³¹ *El Universal*, 1º de abril de 1992.

³² *Idem*.

dicho por Matos resultó cierto. Las acciones ejercidas contra ciertos individuos corruptos se perdieron en algún lugar del sistema judicial y la purga anunciada nunca se efectuó.

Es indudable que dicho fracaso fue el resultado de la protección que se brindaron a sí mismos los partidos dominantes. El sistema de partidos tenía totalmente controlados a los principales jueces, de quienes se esperaba seguirían las instrucciones de los jefes de los partidos mayores. En marzo de 1992, el fiscal general, Ramón Escobar Salom, denunció públicamente a David Morales Bello (entonces uno de los pocos aliados que conservaba Pérez dentro del AD) por dirigir lo que denominó una "tribu de David" dentro del Poder Judicial. Según Escobar Salom, no menos de 24 connotados jueces formaban parte de la "tribu" de Morales Bello y protegían los intereses políticos y financieros de sus patrones políticos de partido.³³ Es de destacar que, en febrero de 1992, Morales Bello había solicitado la pena de muerte para Chávez y los otros líderes del golpe, petición que fue un tanto ridiculizada por la prensa.³⁴

¿Por qué se permitió que esta iniciativa anticorrupción se desvaneciera? Algunos observadores bien informados sostienen que en los años noventa la corrupción había ya penetrado tan hondo en los partidos políticos que era imposible efectuar una reforma desde dentro. Así, por ejemplo, Jorge Giordani comentó al autor que los líderes de partidos en ocasiones incitaban de manera activa a sus subordinados a que violaran la ley, como en una especie de rito de iniciación en la política seria y, también, como una forma de garantizar su propia invulnerabilidad en caso de que el clima político cambiara.³⁵ En las pocas ocasiones en las que alguien era realmente castigado por cometer actos de corrupción (como sucedió en el caso del propio Pérez), esto constituía más una sanción por no amoldarse al sistema, o por otros tipos de diferencias, que por los delitos en sí mismos. El hecho de que el propietario de un restaurante chino fuera la única persona a la que se aplicó una condena importante en el escándalo Recadi, ocurrido durante el mandato de Lusinchi y en el que estuvo involucrada mucha gente, confirma esta suposición.³⁶

Resulta significativo que los dirigentes de los partidos, si bien obstaculizaron la iniciativa contra la corrupción, estuvieran dispuestos a sacrificar el programa económico de mercado de Pérez. Y también estuvieron prontos a sacrificar al propio Pérez, quien fuera acusado de corrupción por el

³³ *El Universal*, 26 de marzo de 1992.

³⁴ Muller Rojas, *op. cit.*, p. 101.

³⁵ Entrevista a Jorge Giordani, 25 de noviembre de 1998.

³⁶ Little y Herrera, *op. cit.*

Congreso y, posteriormente, encarcelado. Nadie duda que Pérez fuera culpable de corrupción, pero también es claro que su remoción se debió a cuestiones de carácter político. Más aún, la acusación contra Pérez tenía por objeto señalar la terminación de la limpieza de casa, no su inicio. A fin de cuentas, los dirigentes partidistas en el Congreso no estaban dispuestos a sacrificar nada de lo suyo. Pero, si bien esto era comprensible en el ámbito personal, no ayudó en nada para contentar a los oficiales militares inconformes (que eran perfectamente capaces de leer el periódico) con el sistema democrático. En julio de 1993 se alcanzó el climax de la insensibilidad política cuando se presentó ante el Congreso una iniciativa para disminuir la gravedad penal de los actos de corrupción, reduciéndolos al nivel de delito menor (propuesta que no fue aprobada).

CALDERA Y EL EJÉRCITO, 1994-1999

La elección de Caldera a la presidencia, en diciembre de 1993, cambió el panorama político. Por primera vez desde que se estableciera el sistema Punto Fijo, Venezuela tenía un presidente que no pertenecía a ninguno de los dos principales partidos políticos. La victoria de Caldera se debió en gran parte a su declarada simpatía por los objetivos (no los métodos) de los líderes golpistas. Un tanto a la manera del De Gaulle de mayo de 1958, Caldera, aunque cuidadoso de actuar de conformidad con la Constitución, ganó los comicios como resultado de que la gente lo percibió de alguna manera asociado con quienes habían actuado inconstitucionalmente. Se tuvo la sensación de que, con esto, se había derrotado al sistema pactado de partidos políticos.

Tanto por temperamento como por talento, Caldera era un conciliador. Una vez en el poder, su política hacia los militares rebeldes fue de cooptación. Chávez y los líderes del golpe fueron indultados, y se reintegró al ejército un grupo importante de quienes fueran expulsados tras los intentos golpistas de 1992 (alrededor de 250 de los 500 depuestos). Los propios líderes aprovecharon su libertad para integrarse a la política democrática. Uno de ellos, Arias Cárdenas, aceptó un puesto importante dentro del gobierno de Caldera y, en 1995, fue nombrado gobernador de Zulia. Por tanto, con la elección de Caldera, el gobierno y la mayoría de la opinión pública rechazó la idea de que los cabecillas del golpe de Estado de febrero de 1992 hubieran hecho algo moralmente incorrecto o que mereciera castigo.

No obstante, esto no puso fin a la crisis de las relaciones civicomilitares. El trato que Caldera daba al ejército estaba muy constreñido por la

amenaza de un nuevo golpe. De acuerdo con dos personas cercanas a él, el gobierno entrante consideraba muy factible que hubiera un nuevo y más fuerte atentado.³⁷ Y lo mismo pensaba el gobierno de los Estados Unidos, el cual envió a Caracas al secretario de Defensa, William Perry, a raíz de un incidente ocurrido en 1994. En esa oportunidad, Perry convocó a un grupo de generales venezolanos a una reunión en su embajada en Caracas y les expuso sin rodeos que los Estados Unidos no tolerarían otro golpe de Estado.

La forma en que Caldera manejó al ejército fue pragmática y gerencial, más que reformadora. No hubo un verdadero intento por volver a profesionalizarlo. En cuanto asumió el poder, en febrero de 1994, Caldera echó a todos los altos mandos militares y ascendió a su yerno, Rojas Pérez, a un puesto clave. Cuando se le preguntó por qué había actuado así, respondió: "Para poder dormir en las noches."³⁸ Por otra parte, el gobierno entrante se sentía limitado en algunas de sus políticas debido al temor de que hubiera oposición militar. Esto fue muy notable en la forma en que abordó el caso del colapso bancario de 1994. El gobierno aceptó indemnizar a los ahorradores de los bancos en quiebra y después impuso controles cambiarios para no arriesgarse a que hubiera fuga de capitales e hiperinflación. Negarse a indemnizar a los ahorradores de los bancos en quiebra era algo legalmente posible, pero políticamente impensable en un momento de descontento social e incierta lealtad militar. Luis Castro comentó al autor que el gobierno temía una "situación al estilo Albania", en la que los rebeldes pudieran rápidamente tomar el control de las calles si se desataban los disturbios. El gobierno no confiaba en que el ejército lo apoyaría en caso de una nueva crisis política y, por tanto, se restringió la política económica.

Más tarde, los detractores del gobierno de Caldera lo acusaron de haber permitido la inercia con respecto a otros tipos de reformas estatales. Al no poder arriesgarse a que se suscitaran disturbios civiles ni militares (los primeros habrían exigido la intervención del ejército), el presidente concedió un enorme poder a los grupos con derecho a veto, en especial dentro del Congreso, donde el gobierno carecía de mayoría. Es cierto que Caldera tenía opciones políticas de las que no echó mano, como convocar al ejército al gobierno y abolir el Congreso. De hecho, durante un momento crítico, en julio de 1994, algunas figuras políticas connotadas solicitaron públicamente al presidente que enviara al ejército a cerrar el Congreso, idea que, según la opinión general, Caldera consideró muy seriamente.³⁹

³⁷ Entrevista a Luis Castro Leyva, 20 de abril de 1997, y a Teodoro Petkoff, 7 de noviembre de 1998.

³⁸ Entrevista a Luis Castro Leyva, 20 de abril de 1997.

Si hubiera optado por esa acción, el ejército probablemente lo habría apoyado en el corto plazo, para después convertirlo en una figura decorativa del gobierno. Asimismo, en tal caso, el sistema político de Punto Fijo habría concluido aún antes de lo que, en efecto, lo hizo.

La alternativa a dicho fujimorazo era aceptar la debilidad severa del gobierno. Durante el periodo de febrero de 1992 a la toma de posesión de Chávez, en febrero de 1999, ningún gobierno venezolano pudo confiar en que tenía el monopolio de la fuerza. Si bien Caldera pudo mantener al ejército fuera del gobierno, el precio que debió pagar fue que todas sus iniciativas de reforma avanzaran con la lentitud de un caracol. Entretanto, los antiguos líderes golpistas construían con vigor su propio partido político y planeaban la campaña electoral de Chávez para 1998. En conjunto, la mezcla de descontento militar, un Congreso poderoso y un panorama político fragmentado hizo casi imposible que Caldera implementara el tipo de reformas institucionales que la mayoría de los venezolanos esperaba.

Los peligros de la estrategia de cooptación de Caldera pudieron observarse a finales de 1998. El 19 de octubre, cuando Hugo Chávez llevaba una clara ventaja en su carrera hacia la presidencia, el general Rojas Pérez hizo un comentario imprudente en el sentido de que era posible que el ejército no aceptara la victoria electoral de Chávez. Tal declaración casi provocó una crisis, pues Chávez aún contaba con muchos partidarios dentro del ejército. De acuerdo con Bernardo Álvarez, miembro del Polo Patriótico,⁴⁰ algunos de los seguidores del aspirante a la presidencia intentaron reunirse, en octubre, con el general Salazar, entonces agregado militar en Washington. En el pasado, Salazar había mostrado cierto apoyo a Chávez, cuando éste fue liberado de la cárcel, y era de todos conocido que sentía una antipatía personal hacia el general Rojas Pérez (entrevista confidencial). Según Álvarez, Salazar respondió al acercamiento de Polo Patriótico hablando con algunos generales estadounidenses para advertirles de un intento de golpe de Estado. Al mismo tiempo, proporcionó a los chavistas información importante sobre la identidad y ubicación del llamado "Clan de los Llanos" (es decir, los seguidores de Rojas Pérez) dentro del ejército. En cuanto recibió esa información, Chávez acusó públicamente a algunos militares de conspirar en su contra. La respuesta de Caldera fue reunir a los generales y aclararles que se opondría tajantemente a cualquier tipo de intervención militar en el proceso electoral.

Tal vez este incidente no debiera en rigor describirse como un "casi fracaso". Lo cierto es que el agregado militar de los Estados Unidos se mos-

³⁹ Entrevista al doctor Rodríguez Iturbe, director de COPEI, 16 de abril de 1997.

⁴⁰ Entrevista a Bernardo Álvarez, Caracas, 30 de noviembre de 1998.

traba en privado escéptico sobre la inminencia de un verdadero intento golpista, pero, por otro lado, no descartaba que ocurriera algún tipo de disturbio militar casi capaz de derrocar al gobierno (entrevista confidencial). Como quiera que sea, lo que queda claro es el hecho de que el control civil sobre el ejército, después de febrero de 1992, seguía siendo muy débil. Lo que mantuvo la paz, más que nada, fue que tanto los líderes del primer golpe como los partidos tradicionales tenían motivos para oponerse a otro atentado. Es decir, lo que mantuvo la democracia después de febrero de 1992 fueron las facciones y los cálculos políticos, más que la legitimación democrática. Lo anterior tira por tierra la afirmación, aún expresada en la literatura académica posterior a 1993, de que en esa época Venezuela era una democracia estable.

EL ESTADO Y EL FRACASO DEL SISTEMA PUNTO FIJO

En el contexto general de este análisis, tres conclusiones parecen pertinentes. Una es que el intento de golpe de Estado de febrero de 1992 proyectó una enorme sombra sobre el sistema. La incapacidad para evitarlo tuvo consecuencias de largo plazo para el sistema político mucho mayores y más dañinas de lo que se supuso en un principio. Es bastante más sencillo incitar el descontento militar cuando las condiciones son propicias, que detenerlo cuando el gobierno civil no goza de popularidad. Aun en los casos en que un golpe militar no es una posibilidad, tal vez debido a reacciones internacionales adversas, el ejército puede convertirse en un grupo de veto y en un foco político. Existe una línea clara y directa que lleva de la incapacidad de los partidos dominantes para mantener un sistema eficaz de inteligencia militar, en 1992, a la elección de Chávez a la presidencia en 1998. Aunque es cierto que la victoria electoral de Chávez difícilmente podía garantizarse a finales de 1992 o incluso a principios de 1998, también es cierto que habría sido difícil evitar algún tipo de ruptura decisiva en el sistema Punto Fijo luego de que el intento golpista de febrero cambió el clima político. Quizá, por factores contingentes, podría haber conducido a un golpe militar incluso antes de las elecciones de 1998. El autor piensa, aunque no puede probarlo, que la oposición de los Estados Unidos fue lo único que evitó que ocurriera un golpe militar en Venezuela en algún momento entre 1992 y 1995.

Un segundo punto, de carácter más general, es que la consolidación de la democracia requiere de un Estado autónomo y respetado. La tesis de Linz y Stepan de que un servicio civil weberiano y un gobierno eficaz basado en las leyes son aspectos importantes para la consolidación democrática

parece confirmarse ampliamente.⁴¹ Existe una relación directa entre la aplicación de la ley y la estabilidad democrática, y el caso venezolano muestra lo que puede suceder cuando esto no se cumple. El clientelismo es un rasgo de la política venezolana que data de decenas, e incluso, cientos de años. El punto es que un Estado patrimonial y carente de leyes no es necesariamente un impedimento para un autoritarismo eficaz, pero sí lo es para la consolidación democrática.

En tercer lugar, es muy difícil para un sistema democrático el reformarse a sí mismo cuando ya es impopular y se encuentra bajo presión. La consecuencia global de la debilidad del Estado fue privar a la democracia venezolana de los medios para defenderse de un ataque oportunista. El problema de cambiar de un sistema basado en la popularidad –que, como es obvio, resulta institucionalmente vulnerable– a un sistema basado en la legitimidad genuina está relacionado con la acción colectiva. Por lo general, las personas con poder, que pueden violar las leyes impunemente, no tienen interés alguno en restringirse a sí mismas actuando de acuerdo con la ley o en aceptar un castigo por transgredirla. Por ende, es preciso crear un sistema institucional eficaz que ofrezca incentivos para premiar a quienes acatan la legalidad democrática y el proceso electoral mismo. Las élites venezolanas del sistema Punto Fijo no lograron esto y, al parecer, Chávez tampoco lo ha conseguido.

Traducción de LORENA MURILLO S.

⁴¹ Linz y Stepan, *op. cit.*